F

Guerra Social Extendida: ¿cómo la crueldad se adueña de todo?

Juan Diego Suárez Gómez*

University of Missouri, Estados Unidos

En el actual contexto colombiano parece que viviéramos un conflicto que aparentemente se cierra por uno de sus frentes más activos, en este caso el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero a su vez se abren nuevas trincheras que tienen como víctimas, entre otros, a los líderes y lideresas sociales que vienen siendo asesinados a lo ancho y largo de Colombia. Sin embargo, este conflicto de baja intensidad se enmarca en una crisis mucho más profunda asociada con un bloqueo civilizatorio, o como lo llamaría Wallerstein (2015), una crisis estructural del sistema-mundo. Una crisis que no es sólo económica, o política, sino una crisis societal que nos agobia en los más hondo de nuestra propia constitución como seres que nos definimos desde el vínculo social.

Igualmente, es necesario alejar la idea de que la violencia social que vivimos en Colombia es un complot de unos pocos que se sientan en una mesa directiva a decidir sobre las vidas y su futuro. Esta violencia es el resultado de las interacciones de las fuerzas en disputa, tanto las económicas como las otras fuerzas que intentan proyectar su hegemonía territorial a lo largo y ancho de Colombia. También debe rechazarse la idea que la actual ola de violencia es un escenario del Estado contra los criminales, tal como se presentan las luchas en los universos de Hollywood o Netflix. El conflicto se extiende como producto de una tensión permanente de intereses económicos en disputa, sean estos las rentas ilegales y la especulación a nivel urbano, o en el medio rural simbolizado por las economías extractivas de diverso cuño que han mutado de acuerdo a la inserción de Colombia en el mercado mundial.

*Doctor en Sociología por University of Missouri (Columbia, Estados Unidos). Investigador Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de la Educación (CIIDE) (Bogotá, Colombia). Correo electrónico: juansuarez36@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-3453-6028

Aunque debe aclararse que esta relación en la que se fundamenta el conflicto es desigual, puesto que hay sectores sociales como los neo-paramilitares de diverso tipo que ejercen un dominio, pero esto no los convierte en los únicos actores de esta crisis social en la que vivimos. Esta idea es fundamental para entender el torbellino de fuerzas sociales a las que nos enfrentamos; no nos resistimos a un grupo de inteligencias supremas, sino a un conjunto de relaciones sociales encarnadas en unos grupos de poder que intentan proyectar de manera ininterrumpida los entramados de intereses extractivistas —recursos y rentas— que han tomado décadas y muchas víctimas en construir.

Primero, esta reflexión sobre las víctimas y la victimización hará un recorrido por la denominada "limpieza social", término que recorre cada calle y vereda de Colombia. En segundo lugar, intentaré ligar el fenómeno de la limpieza con la "pedagogía de la crueldad", donde el vínculo social en sí mismo se degrada hasta convertir los antiguos vecinos en victimarios. Finalmente se hablará de una pragmática de lo popular, es decir cómo es posible pensar en las víctimas como sujetos activos, finalmente para cerrar con un epílogo sobre la pedagogía del cuidado.

Limpieza social: una sociedad pulcra y gobernable está siendo posible

En el año 2005, el antropólogo australiano Michael Taussig publicó un texto llamado *Law in a lawless Land: Diary of a Cleansing in Colombia*, la traducción al español es "Ley en una tierra sin ley: diario de una limpieza en Colombia". Taussig, experimentado etnógrafo, había realizado investigaciones previas en el Putumayo, Nariño y el Cauca, explorando las relaciones existentes entre Chamanismo, violencia social y representaciones culturales. Sin embargo, este libro de 2005 se centra en un concepto que hace parte del léxico social de cualquier comunidad en Colombia, sea ésta rural o urbana: "La Limpieza". Este término se convierte en una alegoría que transita desde la limpieza del cuerpo —sanarlo, sacarle los malos espíritus— hasta la práctica biopolítica de "limpiar" territorios de indeseables o estorbosos grupos humanos.

La "limpieza" siempre ha tenido un objetivo concreto: aterrorizar poblaciones que se han mostrado rebeldes o ingobernables, si nos atenemos al lenguaje claro y conciso de los analistas políticos. Las personas en situación de indigencia, trabajadoras sexuales, "viciosos", "chismosas", ladrones, o en resumen, cualquiera de estas condiciones, tiene que ser sometido a las reglas de gobernabilidad del lugar que habita. Sin embargo, como lo ha relatado Perea (2016) en su libro *Limpieza social: una violencia mal nombrada*, editado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, una intrincada mezcla de miedo y aprobación hace difícil evidenciar la existencia de estas operaciones de intimidación social.

Estas operaciones han seguido un libreto que parece ya un manual de operaciones estándar. Los avisos de la llegada, la publicación de listas, los retenes, las extorsiones, los primeros muertos, entre otros, ayudan a generar esa atmosfera de miedo que invade los territorios y las comunidades locales. Investigadores como Álvarez y Cajiao (2017) han distinguido cuatro formas de "limpieza social", atendiendo a los efectos buscados: aquellos que pretenden parar alguna acción de protesta, los que tienen propósitos extorsivos, aquellos con propósitos contra-guerrilleros y, por último, los que pretenden eliminar los "desechables" de la sociedad, siendo ésta última una clasificación muy colombiana que nos debiera horrorizar y generar un profundo rechazo por atentar contra cualquier remanente de dignidad humana.

Como el mexicano Inclán (2016) ha analizado, esta violencia social empieza a devenir en lo que se ha llamado una "pedagogía de la crueldad", en la cual las interacciones sociales son aprendidas y sufridas desde la violencia social continuada. La crueldad se convierte en una forma de disciplinar socialmente, convirtiéndose en una pedagogía que necesita de ejemplos y lecciones con una aplicación que incrementa a una escala cada vez mayor. En una macabra división social del trabajo, mientras corporaciones y estados ofrecen las condiciones de posibilidad para que estas violaciones se proyecten en el tiempo, son las mismas personas de abajo, miembros de los sectores populares, los que terminan siendo los propios ejecutores y guardianes de este "estado de sitio" permanente.

En esta intersección de amenazas, miedo, violencia física y exacciones de todo tipo es donde la llamada "limpieza social" empieza a tomar su carácter contrainsurgente: vigilancia; identificación; individualización. Desparición, masacre y desplazamiento son los prolegómenos de una transformación molecular de las relaciones sociales. Es decir, son las propias subjetividades, las formas de ver e interactuar con el entorno social, lo que termina siendo transformado. No obstante, es necesario dar un paso más allá en la lectura sistemática de éstos fenómenos, sobre todo por el papel que han jugado éstas intervenciones sociales en facilitar y aclarar el camino para las grandes inversiones inmobiliarias en las ciudades, o en contextos rurales a los megaproyectos de extracción de recursos. Un claro ejemplo de ello son las intervenciones a gran escala que se han realizado en el departamento de Antioquia. Guatapé, Buriticá, Porce, al igual que regiones enteras como el oriente antioqueño y el norte de Antioquia encuadrado en Hidroituango han pasado por este proceso de normalización previo a la implementación de las necesarias inversiones para la extracción.

En tiempos recientes, los megaproyectos extractivos han incluido dentro de sus estudios sociales previos una variable llamada "riesgo socio-político", un doble juego que, por un lado, pretende estudiar las características sociopolíticas de las poblaciones

afectadas y, por el otro, tiene como objetivo tratar de priorizar las acciones en torno a la población sobrante luego de la intervención. Sin embargo, si es necesario esclarecer como zonas que están militarmente intervenidas, y donde las corporaciones a cargo de las explotaciones se han convertido en un actor social total, estas técnicas de intimidación asociadas a la limpieza se vienen sucediendo de manera continuada. Un ejemplo es el caso de Hidroituango, un proyecto económico que intervino un territorio previamente afectado por fuertes olas de violencia, siendo las más mediáticas aquellas asociadas con las masacres del Aro, Santa Rita y la Granja sucedidas a finales de la década de los 90s. De manera continuada los pobladores que se han reunido en torno a iniciativas como Asomituango y Ríos Vivos han denunciado como personas que ya habían sido víctimas de las avanzadas paramilitares a finales de los 90s, recientemente han vuelto a ser desplazadas territorialmente y vulneradas en su dignidad.

Por lo anterior, es posible afirmar que la limpieza, más allá de ser un simple fenómeno asociado a conflictos locales de carácter coyuntural, se ha convertido en una estrategia de intervención social a gran escala. Las llamadas "Casas de tortura" en Medellín, las infames "Casas de Pique" en Buenaventura, los hornos crematorios en el Catatumbo, las desapariciones en el sur de Bogotá, se suman a otros ejemplos a nivel continental como las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez, los asesinatos de afroamericanos por parte de la policía en Estados Unidos, o la ola de asesinatos y violaciones a los derechos humanos que recientemente se han hecho visibles en la Patagonia argentina. Todos estos procesos de intervención se basan en la necesidad de crear un imaginario acerca de una población sobrante, de allí que la llamada limpieza social sea una operación de intervención sistemática pero quirúrgicamente aplicada.

Pedagogía de la crueldad o el lado oscuro del vínculo social

Esta guerra social extendida aparentemente elimina las divisiones por clase y expone de manera abierta lo degradadas que pueden llegar a ser las violencias cotidianas, que no sólo se ponen en función de un gran macroproyecto de muerte, sino que también se evidencian en las relaciones de género, en la posición frente a las personas mayores y todas aquellas que no pueden convertirse en un engranaje más de la guerra social (Vega, 2012). Esta guerra social ampliada, de la cual la limpieza social hace parte, ha generado lo que podría identificarse como una pedagogía de la crueldad.

En este punto, se puede decir que los desequilibrios de este sistema-mundo no son un complot, pero las maneras que se han ideado para resolverlo, o por lo menos aplazarlo en soluciones poco redistributivas, si son cabeza de unos pocos. Sin embargo, el hecho

notorio que debe anotarse aquí es como esta guerra social, a pesar de ser totalmente funcional a aquellos que están en cabeza de las estructuras criminales o institucionales, siempre es ejecutada por lo que llamaríamos los de "abajo", que pueden terminar siendo víctimas o victimarios de acuerdo a la macabra división social del trabajo que impone una situación de conflicto degrada.

Aquellos que cobran las extorsiones, disparan las armas, manejan los vehículos, torturan, asesinan, mutilan, desaparecen, son personas que venden su mano de trabajo, su experticia a las fuerzas que quieren seguir desarrollando sus intereses (Vega, 2012). En cierta medida, este es uno de los grandes logros de esta guerra social extendida, pues la diseminación y destrucción del vínculo social positivo se da en favor del miedo y el terror, o como algunos lo han llamado, una progresiva pedagogía de la crueldad. Sin embargo, esta pedagogía tiene unos rendimientos decrecientes si utilizamos terminología econométrica, o en otras palabras, cada nuevo victimario tendrá que ser más violento y cruel que el anterior, si quiere que las poblaciones se sometan de manera dócil a los nuevos dictados.

En cierta medida podría decirse que esta es una guerra de los de "abajo" contra los de "abajo", sobre todo porque sí es una guerra que se diseña desde Arriba. Si es posible trazar unas líneas de evolución en esto que se ha denominado la victimización en el conflicto social y político colombiano. Sobre todo es importante centrarse en la incesante expulsión de población de los territorios donde se desarrolla el conflicto, generando la idea de que existe una población sobrante que debe ser expulsada. Ya sea en territorios rurales o urbanos, esta expulsión incesante de población ayuda a prefigurar la idea que existe una población que sobra, no sólo porque estorba a la reproducción económica que se pretende, sino también porque su no-lugar social hace posible dejar de lado cualquier significación que pueden tener sus reclamos, e inclusive previene que ellos mismos se conviertan en reclamantes de sus derechos. Esta categoría del desplazado, la cual engloba una gran cantidad de victimizaciones, muchas de ellas simultaneas o superpuestas, genera una subjetividad de no-ser social, característica que no sólo autoriza su desprecio, sino también su arrinconamiento y eliminación, sea esta simbólica, social o física. Pero estos argumentos de orden neomalthusiano no son una simple invención de los perpetradores para eliminar a sus víctimas. Ya sea la crisis ambiental, migratoria, social o educativa, desde hace algún tiempo se ha consolidado la idea de "sobrepoblación" como una de las causas de nuestras crisis civilizatorias, obviando los problemas de distribución de renta y recursos como un origen más concreto de estas desigualdades in-civilizadas.

Esta idea de la población sobrante no tiene como objetivo final exterminar una población entera —que sería costoso social y políticamente— sino consolidar la idea que existe un sector poblacional que no tiene un lugar social, que sobra. Sin embargo,

esta idea de "población sobrante" si tiene un efecto biopolítico más inmediato: se intenta prefigurar sociabilidades precarizadas, condicionadas por el sufrimiento (Levinas, 1993). De allí que muchas de estas personas que fueron víctimas ellas mismas o sus familias, son seres completamente vulnerables, sujetos a las economías basadas en rentas ilegales, que terminan cumpliendo el rol de "soldados", cobradores o facilitadores de esta reproducción del capital paralelo a la legal.

Paradójicamente este marco de inestabilidad, victimización y guerra social, es donde tiene su máxima aplicación la ideología del emprendimiento. Este barroco de la violencia hace aparecer el emprendimiento, el "rebusque", como esa lógica que supera los marcos de la propaganda institucional. El emprendimiento ha existido hace mucho tiempo en Colombia, pero no atado a la famosa "innovación social", sino a la precarización de existencias y subjetividades producto de la guerra social extendida que hace factible este rebusque, algunas veces atado a las rentas sociales provenientes de la misma guerra. Por ello mismo, la ideología del emprendimiento tiene su contrapartida en los sectores de abajo, que no escapan en sus territorios a esta necesidad de "rebusque", así sea ejerciendo la crueldad y la violencia sobre aquellos y aquellas que viven en sus propios territorios, en pocas palabras, sus vecinos.

Este tipo de conflicto es lo que se ha conocido como una guerra no declarada, que destruye todo aquello que permitía a las poblaciones resistir (Ceceña, 2006). Este término es utilizado porque permanece detrás de ella una lógica contrainsurgente que identifica a un enemigo borroso, confuso y difuso (Terán, 2014). El crecimiento geográfico y geométrico de este capitalismo criminal no sólo ocurre como una fuerza más del campo social. La simbiosis que ocurre entre economía legal e ilegal —frontera que siempre ha sido borrosa en Colombia— ya no sólo se da sobre el trabajo o lo que se conocen como los excedentes del capital. Más que una ganancia ocasional, este proceso de guerra social busca dominar cada ciclo de la reproducción social, desde la comida hasta la vivienda o la misma movilidad urbana rural, sino que lo digan las personas que son víctimas de extorsiones a cualquier nivel en ciudades como Medellín, inclusive a la hora de comprar el más mínimo artículo para su alimentación.

En este sentido, las últimas olas de violencia urbana y rural que se han vivido en Colombia no deben ser identificadas como simples hechos criminales, tal y como lo ha concebido el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en una lógica simplificadora: "estos son los criminales contra la sociedad". Al igual que en países como Brasil o Centroamérica, en amplias zonas de Colombia lo que se llama la "ilegalidad" hace parte del amplio consenso que en Ciencia Política se ha denominado como la gobernanza, entendida como la administración pragmática de las fuerzas sociales y económicas presentes en un territorio

y los usos locales que garantizan la soberanía, el dominio. Esta nueva gobernanza estaría asimilada a lo que Mbembe (2011) ha llamado como la época de la Necropolítica, donde se ha instalado una nueva manera de gobernar: la gestión de multitudes. Pero esta no es la multitud de la que hablaba Antonio Negri a la vuelta de siglo, sino que consiste en la disgregación de poblaciones en grupos inmovilizados, paralizados por el terror y confinados a su propia subjetividad de "supervivientes" e inclusive el contexto de esta guerra social extendida toma algunos elementos que Mbembe identifica para el sur global, tales como la gestión de multitudes por medio estados de excepción, que se visualizan en las constantes militarizaciones de las zonas rurales y urbanas, o la paralización de la vida normal de las poblaciones por falta de medios para movilizarse.

Esta guerra social que afecta las comunas de Medellín, las veredas de diferentes municipios del Cauca y los diferentes municipios costeros del pacífico, entre otros, es una guerra contra la manera en que las comunidades y familias han logrado reproducirse socialmente, en pocas palabras, es una lucha contra el cuidado, contra las formas de hacer y ser en el mundo (Inclán, 2016). Esta guerra que afecta las comunidades y las familias permite un rediseño de los territorios, eliminando los diferentes planes de vida que han permitido, así sea precariamente, una reproducción social garantiza la existencia en el tiempo y una forma de estar en el territorio. En cierta manera, esta relación mediada por una guerra social extendida es lo que Mészáros (2004) llamaría un "orden metabólico incontrolable". A propósito de esta idea del metabolismo, el sociólogo venezolano Terán lo define como:

> Cuando hablamos de metabolismo nos referimos al proceso biosocial que es la base donde se reproduce la vida, el cual se constituye como un tipo específico de régimen de territorialidad; de formas de procesamiento y asimilación de energía; de intercambios, consumo y producción biosociales; de tipos de narrativas y construcciones socioculturales; y de tipos de ocupación y ordenamiento territorial; determinados por factores geográficos y ecosistémicos, y estructuras de poder en las organizaciones humanas. (Terán, 2014)

Este proceso metabólico incontrolable que victimiza y revictimiza, se da en un contexto de una intensificación progresiva de la lógica desarrollista en Colombia, y en parte de América Latina. La explotación de recursos naturales nunca ha parado, y la intensificación progresiva de este extractivismo ha tenido sus expresiones en la llamada "minería ilegal", pero también en la extracción de recursos vía concesiones territoriales que en gran parte de las ocasiones coinciden con territorios rurales donde han existido comunidades por décadas, sino siglos, siendo el suroeste antioqueño un gran ejemplo de estas concesiones indiscriminadas.

Esta lógica a su vez, repotencia los procesos de concentración urbana puesto que estas zonas de sacrificio en nombre del desarrollo aumentan la presión sobre la tierra urbana, y mueve más población para ser olvidada en las barriadas populares de las ciudades grandes e intermedias. Sin embargo, también es posible hablar de operaciones de extracción (Mezzadra & Neilson, 2013) en las ciudades, porque más allá de la explotación social del trabajo, el extractivismo urbano también funciona vía grandes eventos internacionales que pretenden mostrar a las ciudades como escaparates de exhibición frente a los visitantes, y al mismo tiempo refuerzan las operaciones de gentrificación y especulación urbana que ha permitido llenar los espacios de torres de apartamentos calcados unos de otros.

Una pragmática de lo popular

A pesar de todo el recorrido que se menciona previamente, quedan unas preguntas ¿existen razones para la esperanza? ¿existe un escape a estas nuevas revictimizaciones basadas en una subjetividad del sufrimiento? En este punto es necesario recordar la idea de gobernanza que se mencionó anteriormente, donde el lenguaje de la soberanía y de los derechos universales aterriza en una serie de transacciones mundanas, cotidianas (Gago, 2015). De acuerdo a lo anterior, conviene seguir a Chatterjee (2008), que en su libro *La nación en tiempo heterogéneo* plantea como toda situación de dominación, por muy fuerte que parezca la hegemonía del poder, siempre existirá margen para una política popular. En este caso de la violencia social extendida, hay que saber identificar como las víctimas, las poblaciones en los territorios, frente a toda esta violencia, son quienes saben "lidiar —apropiarse, rechazar, negociar— con los mecanismos de gobernabilidad que son objeto" (Gago, 2015, p. 310).

Pero tampoco es correcto que esta condición de víctima elimine por principio la capacidad de articulación de su propia realidad, sobre todo porque estas dinámicas sociales de actores que suelen verse sólo como víctimas, niegan que ellos mismos puedan en algún momento ser articuladores de una heterogeneidad social que desborda la capacidad que tienen las ciencias sociales y los gobiernos para entenderlos (Gago, 2015). Los ciclos de violencias generan unas subjetividades atadas al sufrimiento, pero no pueden considerar los sujetos de estas economías barrocas sólo como víctimas (Echeverría, 2010). Por eso mismo, es difícil que desde la academia, las ONG's o sectores externos se objete como las poblaciones son capaces de vivir con sus propios victimarios puerta con puerta. En este sentido, es necesario reclamar la visibilidad de lo que llamaríamos una pragmática popular, que intenta reproducir la vida en estas difíciles condiciones.

Por lo anterior, es necesario abandonar esa distinción que habla de "los de abajo", como aquellos que siempre están destinados a ser gobernados, a vivir debajo de algo o de alguien. Cuando previamente hablábamos de una pragmática popular, precisamente se hacía referencia a una política de conquistas concretas y locales de las cuales dependen la propia reproducción social, sobre todo en una situación de guerra social que pretende volverlos un objeto, hacerlos testigos pasivos de su propia victimización. Obviamente en muchas ocasiones las poblaciones tienen que enfrentar poderes que los superan ampliamente en escala, sea este el crimen organizado transnacional o su hermano mellizo la militarización estatal. Pero estos poderes soberanos son enfrentados por las poblaciones como un sujeto político completo, que no lucha desde sus carencias sino centrado la potencia que ofrece la lucha por garantizar la reproducción social de lo común, de la vida en los territorios tal y como ha venido proliferando desde hace siglos. Así lo demuestran los procesos de comunidades en todo el pacífico, las comunidades de vida en el Urabá antioqueño y chocoano, así como las comunidades urbanas en Medellín y Cali, siempre en conflicto por defender lo común, esa expresión que está llena de contradicciones, y al mismo tiempo, en extensión permanente.

La crisis social produce resultados inesperados, y una de las estrategias de guerra social intentan controlar estos resultados inesperados. Un ejemplo patente de esto son los diversos productos minifundistas de hoja de coca que han ido trasladándose a medida que la frontera de los cultivos de uso ilícito se ha ido expandiendo. Es indudable que estos productores han logrado entrar de manera reciente en una economía de escala a la que nunca pudo integrarse la producción minifundista de productos agrícola, con excepción del café. Precisamente esta estabilidad económica que ha brindado un cultivo de uso ilícito como la hoja de coca es el objetivo que intentan gobernar tanto el estado, las mafias transnacionales y las denominadas disidencias de las FARC. Las disputas que se han escenificado en el pacífico colombiano, y más específicamente en Tumaco, es la muestra de la consolidación de una economía campesina y su progresiva desarticulación por medio de una guerra social extendida que nubla la distinción entre amigo y enemigo.

Epílogo. Lo común como espacio del cuidado

El nombre de Temístocles Machado resonó en los medios del país el pasado 27 de enero de 2018. En los medios se habían multiplicado las advertencias de su asesinato, paradójicamente algunas de esos llamados los hizo él mismo. En Temístocles Machado nos debemos reconocer, porque en su larga lucha en Buenaventura se materializa una

política del cuidado y el cultivo paciente de proyectos sociales. Muchas veces él mismo reconoció la finitud de su labor organizativa por mano de un probable asesino que le truncaría su labor. Sin embargo, esas mismas palabras de advertencia avisan que ante el mensaje del miedo hay una vida por defender.

El Centro de Memoria Histórica ya había titulado la tragedia del puerto sobre el pacífico y que Temístocles no dejaba de denunciar. *Buenaventura: un puerto sin comunidad* fue el título que definió la situación que el líder social denunciaba incansablemente. Pero esa defensa de la población de Buenaventura era al mismo tiempo un grito por la sobrevivencia de prácticas culturales y comunitarias como el paisanaje, el vecinaje y la organización por colonias al interior de los barrios de Buenaventura. El vínculo entre identidad y territorio es asimilable a una pedagogía del cuidado, que se opone a la crueldad masculinizada, que pone por delante la fuerza sobre las prácticas de unión y cuidado mutuo frente a las prácticas destructivas que llegaron con el desplazamiento y la desaparición forzada.

Esta pedagogía del cuidado revive cuando nos reconocemos en Temístocles Machado, poniendo por delante el futuro común que puede garantizarse mientras exista una materialidad que sostenga la vida en común, que nutra un territorio que puede albergar una vida digna basada en las historias y las memorias. Esta pedagogía del cuidado simbolizada por las lideresas y los líderes sociales nos recuerda que vivir de una manera digna, desear, estar bien, no es privilegio de unos pocos, que el cuidado es un mandato que debe estar presente en el conjunto de las acciones de la vida colectiva.

Referencias

Álvarez, E. y Cajiao, A. (26 de febrero de 2017). Águilas Negras: ¿de nuevo en el horizonte? *Razón Pública*. Recuperado de https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/10054-%C3%A1guilas-negras-de-nuevo-en-el-horizonte.html

Ceceña, A. E. (2006). Subjetizando el objeto de estudio o de la insubordinación epistemológica como emancipación. En A. E. Ceceña (Coord.), *Los desafíos de las comunidades en un contexto militarizado* (pp. 13-43). Buenos Aires: Clacso.

Chatterjee, P. (2008). *La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Echeverría, B. (2010). *Modernidad y blanquitud*. México: Ediciones Era.

Gago, V. (2015). *La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular*. Madrid: Traficantes de Sueños.

Inclán, D. (2016). Contrapuntos: la crueldad contra el cuidado (o cómo la violencia se hace cotidiana). *Bajo el Volcán*, *16*(24), 13-31.

Levinas, E. (1993). El sufrimiento inútil. En *Entre nosotros. Ensayos para pensar en otro* (pp. 133-126). Valencia: Pre-Textos.

Mbembe, A. (2011). *Necropolítica*. Madrid: Melusina.

Mészáros, I. (2004). *The Power of Ideology*. Londres: Zed Books.

Perea Restrepo, C. M. (2016). *Limpieza social: una violencia mal nombrada*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.

Mezzadra, S. y Neilson, B. (2013). *Border as Method*. Durham: Duke University Press

Taussig, M. (2005). *Law in a Lawless Land: Diary of a Cleansing in Colombia*. Chicago: The University of Chicago Press.

Terán Mantovani, E. (2014). *Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos*. Recuperado de http://www.revistapueblos.org/blog/2014/09/11/las-espirales-del-debate-sobre-extractivismo-y-los-nuevos-tiempos/.

Vega Cantor, R. (2012). Colombia, un ejemplo contemporáneo de acumulación por desposesión. *Theomai*, 26, 95-118.

Wallerstein, I. (2015). *Seminario: el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista*. Chiapas, México. Recuperado de https://www.centrodemedioslibres.org/category/el-pensamiento-critico-frente-a-la-hidra-capitalista/

Cómo citar

Suárez Gómez, J. D. (2018). Guerra Social Extendida: ¿cómo la crueldad se adueña de todo? *FORUM. Revista Departamento Ciencia Política*, 14, 207-217.